



Al servicio de la Justicia y de la paz social

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA DE DECISIÓN CIVIL

MAGISTRADO SUSTANCIADOR
MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO

Medellín D.E. de C., T., e I., doce de mayo de dos mil veintitrés.

Radicación n°.	05001 31 03 007 2021 00207 01
Proceso.	Verbal
Demandante.	Oleoducto Bicentenario de Colombia S.A.S.
Demandados.	Rafael Hernán Abril y otros.
Procedencia.	Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Medellín
Decisión.	Confirma auto que decretó pruebas
Tema.	Requisitos objetivos de las pruebas
Rdo. interno.	025-23
Interlocutorio No.	094-23

ASUNTO A RESOLVER

Procede la Sala a resolver la apelación formulada por el apoderado de la parte demandada, en contra del auto del nueve de febrero de 2023, en lo atinente a le negativa del decreto de una prueba solicitada por esta, en los siguientes términos:

ANTECEDENTES

1.- Hechos y pretensiones. Formuló OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S.A.S. demanda verbal de simulación y nulidad absoluta en contra de los señores Rafael Hernán Abril, Gloria Amparo Gómez Galeano y Rafael Andrés Abril Gómez, relacionado con el contrato de compraventa del inmueble conocido como “*El Encanto*”, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 146-42123, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Lorica, ubicado en el Municipio de San Antero, Córdoba, correspondiéndole su conocimiento al Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Medellín, el cual, después de resolver las excepciones

previas e inadmitir la demanda, la admitió por auto del 21 de noviembre de 2022 (Archivo 38, Cuaderno principal).

Vinculados los demandados, el abogado que los representa, además de formular excepciones, solicitó entre otras la siguiente prueba:

“Exhibición de documentos. Ordénese a Oleoducto Bicentenario de Colombia exhibir toda la documentación en la que consta los estudios previos a la compra del Lote ‘El Encanto’ a la sociedad Negocios Costeños S.A.S., incluyendo: el estudio de títulos, los estudios relacionados con la destinación que daría el predio en su proyecto ‘ampliación del terminal Coveñas’, las comunicaciones intercambiadas con Negocios Costeños S.A.S y con Rafael Hernán Abril y Rafael Andrés Abril.

Con dichos documentos, que se encuentran en su poder, pretendo demostrar que la sociedad demandante tenía pleno conocimiento de que los actos y contratos a que se refiere la demanda eran reales y ciertos y que recaían sobre bienes que podían ser objeto lícito de dichos actos y contratos”.

Así, siendo el momento procesal oportuno, se convocó a audiencia para la evacuación de las etapas contempladas en los artículos los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso, mediante auto del nueve de febrero de 2023, por lo que en esta misma providencia se decretaron las pruebas que se estimaron procedentes.

2.- El auto apelado. En la referida providencia, se denegó por el *a quo* la referida prueba, al estimarse que no se había indicado de manera concreta sobre que documentos, su naturaleza ni la descripción sobre los cuales se estaba pidiendo la exhibición, conforme al artículo 266 del C. General del Proceso. (Archivo 42, Cuaderno principal).

3.- La apelación. Oportunamente el apoderado de los demandados, interpuso recurso de reposición y en subsidio, el de apelación, frente a la negativa del decreto de esta prueba, manifestando que, con solo leer la solicitud probatoria, bastaba para constatar a que documento se refiere la exhibición y la clase de documento.

Expuso que la solicitud de dicha prueba no corresponde a una exhibición de documentos según el régimen del artículo 266 del C. General del Proceso, ya que lo que busca es que se inste a la parte demandante a cumplir con un deber que le impone la ley, esto es, aportar los documentos que estén en su poder y que le sean

solicitados, por ser relevantes para el proceso. En su sentir, aún si los documentos a aportar por Oleoducto Bicentenario admitieran mayor precisión, la parte demandada no puede aportar las precisiones adicionales que exige el Despacho, y exigírselo constituiría una carga procesal excesiva.

Señaló que, de todas maneras, si hubiera sido posible una mayor determinación de los documentos, el juzgado debió solicitar a la parte demandada hacer las precisiones adicionales del caso, y no rechazar la prueba de plano.

Finalmente, dijo que el juez tiene el deber de decretar, aún de oficio, las pruebas que sean necesarias para esclarecer los hechos objeto de controversia, por tanto, como el demandante afirma que hubo simulación, es decir que su declaración de voluntad no correspondía a la real, es necesario verificarse las escrituras, contraescrituras y documentos internos de Oleoducto Bicentenario, en los que pueda constar su verdadera voluntad.

Si bien por proveído del nueve de marzo de 2023, se repuso la decisión de negar la prueba de exhibición de documentos, ello lo fue de manera parcial, pues no se accedió a la exhibición de las comunicaciones intercambiadas entre Negocios Costeños S.A.S., Rafael Hernán Abril y Rafael Andrés Abril. Sostuvo el juzgado de primera instancia que no se había logrado advertir a qué tipo de documento se hace referencia, ni tampoco se afirmó que tales comunicaciones obren por escrito, ni su contenido, naturaleza ni lo que se pretende demostrar con esta prueba.

En consecuencia, mediante adición de auto de fecha 23 de marzo de 2023, concedió el recurso de apelación en el efecto devolutivo, disponiendo la remisión del expediente a esta Corporación. (Archivo 47, Cuaderno principal).

CONSIDERACIONES

1.- Prueba judicial. La prueba judicial es el acto procesal que tiene como finalidad arribar al operador jurídico al convencimiento de los hechos objeto de controversia. Corresponde a los contendientes acreditar los hechos o excepciones que aduzcan, según el papel que desenvuelvan, en aras de lograr la prosperidad de sus súplicas.

Nuestra normativa procedimental civil establece ciertas exigencias que

deben satisfacerse al momento de solicitar y practicar el medio probatorio, a efectos de que el funcionario pueda no solo decretarla sino también apreciarla al tiempo de su valoración.

Tales exigencias son clasificadas por el doctrinante Azula Camacho¹ en: “*Requisitos Subjetivos*”, que se refieren a los sujetos y tienen en cuenta fundamentalmente dos aspectos “*LA COMPETENCIA Y LA LEGITIMACIÓN*”, la primera atañe al funcionario y la segunda a las partes; “*REQUISITOS OBJETIVOS*” se refieren a la materia u objeto del proceso y están constituidos por “*la conducencia, pertinencia, utilidad y ausencia de prohibición legal*” y “*REQUISITOS DE ACTIVIDAD*”, que se refiere a las circunstancias de “*lugar, tiempo y modo*”.

En lo que respecta a los requisitos objetivos, tenemos que:

“A) Conducencia. Hace referencia a que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho... Así, por ejemplo, la compraventa de inmuebles es un acto solemne que debe constar por escritura pública, por lo cual la prueba conducente para demostrarlo es esta clase de documento.

B) Pertinencia. Mientras la conducencia es asunto de derecho, referente al medio probatorio, la pertinencia es de hecho, por relacionarse con lo que constituye materia del debate o la litis... consiste en que el hecho a demostrar se refiera o tenga relación con los que configuran controversia.

C) Utilidad. La utilidad hace referencia a que con la prueba pueda establecerse un hecho materia de la controversia que aún no se encuentre demostrado.

D) Ausencia de prohibición legal. La prueba puede ser conducente pertinente y útil y, sin embargo, no es dable decretarla y practicarla por prohibirla la ley”.

Es en el auto de apertura del período probatorio donde el operador debe examinar si las pruebas solicitadas por las partes en los actos procesales previos, resultan idóneas para acreditar los supuestos objeto de controversia, debiendo rechazar *in limine* las que no, como expresamente refiere el canon 168 del Código General del Proceso:

“El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles.”

¹ En su obra “MANUAL DE DERECHO PROBATORIO”. Editorial Temis S.A. Bogotá, 1998. Pág. 51 y ss.

Nótese que, tratándose de pruebas impertinentes o superfluas, esto es, aquellas que tienden a demostrar hechos que no guardan relación con el tema de controversia, o que aun teniéndola ya se encuentren acreditados, su impertinencia o inutilidad debe ser “*notoria o manifiesta*”, es decir, palpable u ostensible, pues de lo contrario lo procedente es que el juez disponga su práctica dada la posibilidad de que contribuyan al esclarecimiento de los supuestos debatidos.

2.- Caso concreto. En el *sub lite*, el *a quo* desestimó la solicitud de la parte demandada, tendiente a exigir a la demandante a que exhibiera las comunicaciones intercambiadas con Negocios Costeños S.A.S., Rafael Hernán Abril y Rafael Andrés Abril, por estimar que, no se lograba advertir a qué tipo de documento se estaba haciendo referencia, si este se encuentra por escrito, su contenido, naturaleza ni lo que se pretende demostrar con el mismo.

Así, el problema jurídico se circunscribe en determinar si la prueba peticionada por la parte demandada, relativa a la exhibición, cumple con los requisitos establecidos en el artículo 266 del C. General del Proceso, puesto que, aunque el letrado que representa la parte demandada señala en el escrito de apelación que el medio probatorio no debe regirse por dicha normativa, en la forma como fue solicitada, necesariamente debe concluirse lo contrario.

En efecto, y en ello le asiste razón al recurrente, existe la posibilidad de lograr la aportación de documentos sin necesidad de emplear la acción exhibitoria contemplada de la mencionada normativa, como lo establece el numeral 5º del artículo 96 del C. General del Proceso, sin embargo, en la forma como fue descrito y deprecado el citado medio probatorio en la contestación de la demanda, lo que se evidencia es que se pretendía procurar la exhibición de que trata el artículo 266 del C. General del Proceso.

Obsérvese que se enunció como “*Exhibición de documentos*”, y se exigió ordenar a Oleoducto Bicentenario de Colombia Exhibir toda la documentación en donde consten los estudios previos a las compras del lote La Esperanza, al igual que las comunicaciones que realizaron Negocios Costeños S.A.S., Rafael Hernán Abril y Rafael Andrés Abril; es más, se afirmó que la tenencia de los documentos estaba en cabeza de la promotora de la acción y se relató su finalidad, pretendiendo adecuarla a los presupuestos del artículo 266 del C. General del Proceso.

Definido este reparo realizado por parte de los demandados, corresponde a la Sala verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la aludida norma, pues esta señala que: *“Quien pida la exhibición expresará los hechos que pretende demostrar y deberá afirmar que el documento o la cosa se encuentra en poder de la persona llamada a exhibirlos, su clase y la relación que tenga con aquellos hechos...”*; exigencias que valga anotar, no pueden catalogarse de carga procesal excesiva, porque la misma preceptiva dispone la práctica de la exhibición si se cumplen, pues de lo contrario, conlleva a su denegación.

Del contenido de la petición de la prueba, puede vislumbrarse que se afirmó por la parte demandada que las comunicaciones intercambiadas entre Negocios Costeños S.A.S., Rafael Hernán Abril y Rafael Andrés Abril, se encontraban en poder de la sociedad demandante y que con estas se pretendía demostrar el conocimiento que tenía la parte actora de que los actos realizados por estos eran reales y ciertos.

No obstante, nada se dijo sobre la relación que tenían estas comunicaciones con los referidos hechos, es decir, que tenían que ver las comunicaciones que pretende sean exhibidas con los actos, contratos o negociaciones realizados por terceros, esto es, Negocios Costeños S.A.S., Rafael Hernán Abril y Rafael Andrés Abril. Es que, si OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S.A.S. no fue interlocutora en las comunicaciones, no encuentra la Sala una correlación entre estas y lo que se pretende probar, con lo cual se determinaría la posible pertinencia de la prueba.

Aunado a ello, como bien lo adujo el Juzgado de primera instancia, ninguna mención se hizo de las comunicaciones en cuanto al medio en que se encontraban, además, en qué consistía su contenido y porque involucraba a la sociedad demandante. Bajo estos parámetros, no habiéndose cumplido con la totalidad de las exigencias del artículo 266 del C. General del Proceso, para efectos del decreto de la exhibición peticionada, procedía la negativa de la práctica de la prueba, como bien lo definió el Juzgado de primer grado.

De otro lado, esgrime el apelante que el Despacho puede decretar la prueba de oficio. Sobre ese particular, conviene recordar que, si bien el juez tiene una potestad – deber de decretar este tipo de evidencias, no lo puede hacer en cualquier circunstancia ni en cualquier tiempo, es decir, lo debe hacer cuando tenga dudas

relacionadas con el objetito de la decisión, al extremo que le impiden definir el asunto. De manera que, la prueba de oficio no es deber del juez cuando su finalidad es suplir falencias demostrativas de las partes, como cuando incumplen presupuestos para su petición o su práctica, o cuando son ellas las que tienen la iniciativa de su decreto.

A tono con lo dicho en precedencia, se pronunció la Corte Suprema de Justicia en SC 5676 de 2018, exp.: 2008 00165 01, en donde señaló:

“En otros términos, si bien los poderes que se le han venido confiriendo al fallador ponen de presente que la tendencia legislativa se orienta a la superación del sistema dispositivo puro y la mayor vigencia del inquisitivo, la supresión de aquél no se ha producido, de lo cual puede concluirse que la existencia del sistema mixto representa una equilibrada amalgama, en la que, con la denodada intervención de las partes y la potestad oficiosa del juez, se logre una justa y eficaz composición del debate, a partir de bases ciertas y no meramente formales.

Conforme con ello, aunque al juez se le exige acuciosidad y dinamismo en la búsqueda de la verdad real sobre la cual ha de definir la controversia, esa labor no se extiende hasta el punto de tener que suplir en cualquier supuesto la carga probatoria que le incumbe a las partes.”

Por ende, si en este caso no se cumplen los requisitos legales para decretar la exhibición de documentos, tal inexactitud no se sortea con el decreto de la prueba de oficio rogada, de suerte que ésta queda supeditada, como se anticipó, a incertidumbres que tenga el juez al momento de fallar, lo cual no es posible prever desde ahora.

Conforme a lo esbozado con antelación, se confirmará la decisión apelada y se condenará en costas a los recurrentes, en cuya liquidación, que deberá hacer el a quo, se incluirá el equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, como agencias en derecho, siguiendo lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso, en concordancia con el artículo 5, numerales 1º y 7º, del Acuerdo PSAA16-10554, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la **SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, CONFIRMA** la decisión contenida en el auto del nueve de febrero de 2023, proferido por el JUZGADO SÉPTIMO CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, dentro del proceso VERBAL instaurado por OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S.A.S. en contra de los señores

Rafael Hernán Abril, Gloria Amparo Gómez Galeano y Rafael Andrés Abril Gómez, por lo dicho en la parte motiva de esta providencia.

COSTAS en esta instancia a cargo de los recurrentes. En la liquidación, que deberá hacer el a quo, se incluirá el equivalente a uno (1) salario mínimo legal mensual vigente, como agencias en derecho.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'MARIO GÓMEZ LONDOÑO', with a stylized, cursive script.

MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO

Magistrado

Firma escaneada, conforme el artículo 105 del Código General del Proceso, en concordancia con las disposiciones de la Ley 2213 de 2022